

III. La expansión de la economía cafetera

1. El Café

Durante las dos últimas décadas del siglo XIX el país asistió a una transformación económica que produjo los más hondos efectos sobre la estructura de la sociedad colombiana: el desarrollo acelerado de la producción de café y la conversión de este grano en el principal producto de exportación. Durante el siglo XIX una y otra vez algún producto agrario había capturado la imaginación de los empresarios rurales colombianos y había sostenido por unos cuantos años una tímida, prosperidad para sus productores y exportadores. Pero el tabaco, la quina, el añil habían sido producidos por núcleos muy reducidos de población, el ingreso que, su exportación generó se apropió en forma muy concentrada y, pasado el auge exportador, los cambios que dejaron en la estructura agrícola colombiana resultaron muy pequeños. Así hacia 1880 eran pocos los productos agrícolas que se cosechaban para mercados internacionales o incluso regionales. Al exterior sólo se enviaban cantidades significativas de café, tabaco, quina y cueros de ganado; dentro del país sólo el azúcar y la carne constituían productos con un mercado que justificara el comercio interregional.

Dada la gran diversidad de antecedentes históricos y de condiciones geográficas, las empresas agrícolas ofrecían un rostro muy variado a lo ancho del país. Quizá la forma dominante era la de la hacienda de tipo tradicional, donde los campesinos recibían una parcela de tierra, en la que sembraban artículos alimenticios, a cambio de unas jornadas mensuales de trabajo remunerado en la hacienda o de un pago en metálico. El propietario se dedicaba a algunos productos alimenticios de venta local, a la elaboración de panela y a la cría de ganados. Al lado de la hacienda tradicional eran numerosos los propietarios de pequeñas parcelas explotadas por trabajo familiar y dedicadas casi exclusivamente a la producción de alimentos.

Estas formas tradicionales, que conformaban la gran mayoría de las exportaciones agrarias del país, respondían en forma muy lenta al crecimiento de la demanda producido por el aumento de la población; aunque el fenómeno puede tener otras causas, es indicativo que los precios de los principales productos agrícolas hayan subido cerca de tres veces entre 1848 y 1878 en la zona de Bogotá. El mayor esfuerzo de innovación tecnológica dentro del sector agrícola se dio en el área ganadera: casi todos los grandes cambios en el sector rural en el siglo XIX se redujeron -antes de la aparición del café- a la expansión del número de cabezas de ganado, a la traída de nuevas variedades animales y a la importación de nuevas variedades de pastos. A fines de los 70 se expandió además el uso de las cercas de alambre, que permitía hacer algo más intensiva la cría del ganado. Otro sector en el que se dio una expansión inicial de agricultura comercial fue el de la caña de azúcar, en particular en la región del Valle del Cauca y en algunas zonas de la Costa Atlántica. Pero éstos eran, con el tabaco, los únicos productos que superaban los estrechos mercados locales. Eran por tanto, con los cultivos de exportación, los productos a los cuales se orientaban los grandes propietarios o los comerciantes urbanos en trance de inversión rural. En general, este tipo de agricultura reunía sólo marginalmente a las formas de trabajo asalariado. Sólo donde la hacienda comenzaba a adoptar formas de plantación (azúcar) o en las fincas ganaderas que abastecían las ciudades más importantes era frecuente el uso continuo de trabajadores asalariados; en los demás casos se prefería tener una población residente en la hacienda, fuese como arrendatarios, como aparceros o como concertados, y usar asalariados sólo en las épocas de mayor demanda de mano de obra.

En Antioquia, por otra parte, eran bastante numerosas las pequeñas y medianas granjas. Allí se había desarrollado una producción poco vinculada a los mercados, centrada en el cultivo familiar de maíz y frijón y en la cría de ganado vacuno y porcino.

Los cambios más visibles en los años anteriores habían sido la colonización, sobre todo en el sur de Antioquia, y el crecimiento de una ganadería más desarrollada. Pero estos cambios afectaban poco los rasgos fundamentales del sector rural. El gran cambio se dio con el avance del cultivo del café, que involucra a la larga una proporción muy alta de la población rural del país y, contra lo que había ocurrido en los casos anteriores y se suponía que ocurriría de nuevo con el café, logró un acceso estable a los mercados mundiales y adquirió una permanencia como producto de exportación que no había logrado ningún producto agrícola previo.

La rapidez del proceso de expansión del café no tenía precedentes. Algunas cifras de exportación lo muestran con claridad: las ventas al exterior, que fueron de 64.000 sacos de 60 ks en 1870 alcanzaron 103.000 en 1880; 15 años después, en 1895, ascendían a 344.000 sacos y en 1898 llegaron a la cifra de 510.000: en los 18 años entre 1880 y 1898 se habían multiplicado casi por cinco. El período de 1898 a 1905, en medio del cual se presentó la guerra de los 1.000 días, fue de estancamiento y en 1905 las exportaciones fueron de 488.000 sacos, que subieron a 896.000 en 1912 y a 1.616.000 en 1919. Por último, para fin de la década de los 20 habían llegado a una cifra que superaba los tres millones de sacos. Aunque los precios fluctuaron bastante, los ingresos en dólares generados por estas exportaciones crecieron en forma paralela, de unos 1.9 millones en 1880 a 8.6 en 1898, 16.5 en 1912; 58.5 en 1919 y 74.4 millones en 1929.

Como puede verse en las cifras anteriores, los períodos de más rápido crecimiento de la producción estuvieron en la década de 1890, hasta 1898, y luego en los años que siguieron, a 1905, cuando se logró un crecimiento relativamente continuo que duró hasta 1930. Este crecimiento, por lo demás modificó bastante la distribución de la cosecha dentro del territorio nacional. Inicialmente la producción se había localizado en las laderas de la región de Santander, que producía alrededor del 80% del grano hacia 1875, pero a partir de esta época la mayor parte de las plantaciones se hicieron en las vertientes de Cundinamarca y en la zona de colonización antioqueña. Para 1913 el 30%, mientras que Antioquia cosechaba ya más del 35% del grano y Cundinamarca y Boyacá habían subido al 18.7%.

Aunque en cualquiera de las grandes regiones del país podían encontrarse diversas formas de organización de las explotaciones cafeteras, el predominio de un tipo u otro de explotación dentro de cada zona daba a ésta una fisonomía peculiar. En Santander parece haber predominado la hacienda cafetera organizada mediante el sistema de aparcería, mientras que en Cundinamarca muchos grandes propietarios y comerciantes establecieron extensas plantaciones que recurrían fundamental a arrendatarios-trabajadores que recibían una parcela a cambio de la obligación de trabajar en la hacienda una parte de su tiempo, por lo general con pago de salario. En Antioquia, aunque las primeras plantaciones fueron hechas por grandes propietarios, y eventualmente se formaron algunos grandes cafetales, pronto los propietarios medios y pequeños comenzaron a dedicarse al nuevo cultivo. Para ellos el café constituyó una gran oportunidad de obtener una cosecha de alto valor, capaz de absorber elevados costos de transporte y garantizar un flujo constante de ingresos monetarios, bastante altos en comparación con el de otros sectores campesinos del país. El hecho de que la colonización antioqueña del período precedente hubiera abierto zonas geográficas muy aptas para el cultivo cafetero, así como la posibilidad de utilizar la mano de obra familiar, bastante numerosa en un área caracterizada por un crecimiento de la población muy rápido, contribuyeron a convertir las laderas de los departamentos de Antioquia y Caldas en zona de elección para el café. Sin embargo, el estímulo principal para la súbita expansión del cultivo lo dio la gran perspectiva de ganancias que daba esta actividad: en 1893 se calculó que la inversión en café podría producir una rentabilidad superior al 50%, y aunque el rendimiento real debió resultar mucho más bajo (se ha calculado que fue de alrededor del 35%) por la caída de los precios que se presentó a partir de 1896 tal rentabilidad era insólito en cualquier otro tipo de inversión de la época.

CUADRO 2
VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES
DE CAFE EN ALGUNOS AÑOS, 1880-1930

Años	Miles de sacos de 60 kg	Millones de dólares	Valor total de exportaciones
1880	103	1.9	13.8
1887	106	2.3	14.2
1892	121		16.2
1898	510	8.6	16.4
1905	488	4.6	11.8
1910	548	5.7	18.5
1912	896	16.5	31.6
1916	1.162	18.6	34.6
1919	1.616	58.5	85.1
1922	1.712	33.2	48.3
1925	1.947	65.5	83.5
1929	2.836	74.4	122.8
1930	3.173	59.6	109.5

Fuente: Banco de la República.

Debe señalarse, sin embargo, que los beneficios de las exportaciones cafeteras debían compartirse con los agentes encargados de la comercialización de la cosecha, que fueron inicialmente comerciantes nacionales. Hubo no obstante períodos en los cuales, compañías exportadoras norteamericanas adquirieron una posición de dominio en el tráfico exportador, en especial durante la segunda década del siglo XX cuando desplazaron casi por completo a los comerciantes locales. Otros momentos del proceso de exportación del café, en particular la trilla, se conservaron en manos de colombianos, y ayudaron a concentrar algo los ingresos cafeteros, incluso en zonas donde la propiedad de los cultivos no era muy concentrada.

En términos generales, el hecho de que la propiedad de los cultivos cafeteros estuviera bastante extendida -lo que no debe llevar tampoco a ignorar que incluso en la zona antioqueña se formaron extensas plantaciones de propiedad de las oligarquías locales- hizo que los ingresos y beneficios de la exportación correspondieran a una numerosa y dispersa población. Esta irrigación del ingreso cafetero a zonas amplias rurales tuvo más claros efectos sobre el desarrollo de la economía justamente en Antioquia y Caldas, dado el predominio del pequeño y mediano cafetal; en zonas como Cundinamarca, los ingresos al productor se concentraron en una estrecha capa de propietarios, los cuales aunque habían mostrado audacia empresarial al iniciar la expansión cafetera tendieron a asumir un papel más pasivo de rentistas hacia la segunda y tercera década de este siglo. En la zona Occidental, tanto la población rural ligada directamente a la producción del café como los sectores urbanos vinculados al transporte y la comercialización se convirtieron en consumidores habituales de productos industriales, creando así por primera vez un mercado interno que diera base a un posible desarrollo de un sector industrial liviano. Al ritmo de la producción cafetera, se expandieron las actividades comerciales y se hicieron grandes fortunas en el comercio de exportación cafetera y en el correspondiente tráfico importador. La necesidad de vías de transporte se hizo más evidente, y encontraron justificación y posibilidades de éxito los programas de desarrollo de un sistema vial más moderno, centrado en los ferrocarriles. Los cafeteros, además, conformaron una creciente demanda de empaques y maquinarias simples para el procesamiento del café, lo que permitió el surgimiento de algunas industrias urbanas.

Por último, el café permitió inicialmente (1880-1905) compensar la caída acelerada en el valor de otros productos de exportación y luego se convirtió en el motor principal del acelerado incremento de las ventas colombianas en el extranjero, que dieron al país una creciente capacidad importadora entre 1905 y 1930. En la misma medida, al permitir aumentar el valor de las exportaciones per capita y la participación del sector exportador en la economía nacional, la expansión cafetera consolidada la orientación que estaba tomando la estructura económica colombiana, al hacerla estrechamente dependiente de los mercados extranjeros para su desarrollo, al forzar otros elementos del sistema a dirigirse drásticamente "hacia afuera" y al integrar más estrechamente la economía nacional con las economías metropolitanas de la época. En este sentido, se produjo desde comienzos del siglo un cambio gradual pero rápido en la orientación fundamental del comercio exterior, al adquirir cada vez más peso el papel de los Estados Unidos como comprador de los productos nacionales, hasta que a mediados de la década de 1920 alrededor del 80% de las exportaciones se hacían a Norteamérica. Pero si Europa rebajó tanto su participación en las exportaciones colombianas, el cambio en cuanto abastecedora de los mercados nacionales fue menos brusco, y en la misma década todavía un 50% aproximadamente de las compras del país se hacían en tal región.

2. Los sistemas de comunicaciones

El sistema de transporte se había orientado hacia el exterior desde antes del auge cafetero, pero fue uno de los elementos que el creciente peso del sector exportador contribuyó a mantener dentro de un ordenamiento centrífugo. Las vías principales eran aquellas que ligaban a cada centro económico importante, en la forma más rápida posible, con el mar, para dar salida fácil y barata a las exportaciones. Las vías internas del país se siguieron descuidando, y pese a la construcción de algunos caminos, las diversas regiones del país se mantenían bastante aisladas.

El esfuerzo más importante de esta época está en la construcción de ferrocarriles, pero para 1885 apenas se comenzaba la tarea de unir con el mar o con el Río Magdalena los principales centros de poblamiento. Aunque se habían iniciado trabajos para ligar por vía férrea a Bogotá y Medellín, con el Magdalena, a Cali con el Pacífico y a Barranquilla con el Atlántico, sólo el último ferrocarril estaba en servicio: se trataba de 27 kilómetros sobre terreno plano. Los distintos trozos construidos, inconexos aún, sumaban unos 2.000 kilómetros -cuando en la Argentina se habían ya construido unos 3.000 kilómetros- que llegarían a 900 en 1910. Estos ferrocarriles abrirían el camino a las exportaciones: la reducción de los costos de transporte que efectuaron fue sin duda uno de los factores centrales en el auge de las exportaciones posterior a 1905. Los ferrocarriles representaban un salto bastante notable en el sistema de comunicaciones del país: prácticamente remplazaban el transporte en mula, pues el transporte sobre ruedas, por extraño que parezca, apenas se realizaba en algunos pocos sitios planos, cerca de las mayores ciudades del país. Y en ciertos casos el ferrocarril remplazaba al carguero humano, que conservaba su función en las zonas que todavía no estaban unidas por los ferrocarriles. A fines de siglo, por ejemplo, todavía se llevaba a Bogotá, desde el Magdalena, la carga voluminosa sobre la espalda de los cargueros; sólo así podían las clases altas de Bogotá darse el lujo de acompañar sus veladas con el piano ejecutado por alguna lánguida hija de familia.

La construcción de ferrocarriles dio ocasión para nuevas inversiones de capital extranjero en el país, que se añadieron a las ya existentes en la navegación a vapor del Río Magdalena y el canal del Dique y en la minería de Antioquia y Chocó. Pero el volumen del capital invertido, casi todo inglés, fue reducido. Los contratistas, ingleses o norteamericanos, operaron muchas veces con capital local o estatal, pero una larga historia de pequeños empréstitos y emisiones de bonos por las compañías constructoras condujo rápidamente a que la propiedad de los ferrocarriles más importantes quedara en manos de sociedades inglesas. En 1910 la mayoría de los ferrocarriles era de estas empresas, que tenían un capital de unos 25.000.000 de dólares. Esta suma representaba el grueso de la incorporación de capitales extranjeros a la economía nacional, que como se ve era todavía muy limitado; el único sector de importancia al cual se habían vinculado capitales foráneos en años recientes era el de la agricultura de plantación, en especial al banano, donde desde finales del siglo estaban operando capitales norteamericanos de la United Fruit Company. Todavía en las primeras décadas de este siglo la dependencia del país hacia las metrópolis seguía siendo esencialmente comercial, basada en el intercambio de productos agrícolas y mineros por los artículos manufactureros que consumía el país.

3. Algunos aspectos de la política económica

Como ya se ha mencionado, Núñez acabó sorpresivamente con la política de bajas tarifas aduaneras que se había establecido a mediados del siglo XIX, y que en su opinión había sido una adopción puramente imitativa del librecambismo inglés, beneficiario real de tal medida. Es más: Núñez llegó a atribuir al librecambismo el estancamiento económico del país, su pobreza y, como secuela de ésta, las guerras civiles que lo habían azotado. Y veía en el estímulo, mediante la protección aduanera, de ciertas manufacturas, un impulso para el surgimiento de nuevas clases medias que se colocaran "entre el elemento social que dirige y gobierna y la muchedumbre iletrada que forma la base de la pirámide".

Pero este programa, tal vez coherente en la mente de Núñez, se puso en práctica en forma tímida y confusa. La renta de aduanas constituía el ingreso principal del Estado, y las consideraciones fiscales predominaban con frecuencia sobre los criterios de protección a la industria por nacer, se prestaba también el sistema a la corrupción y a componendas destinadas a favorecer personas o grupos determinados. Además, los empresarios comerciales y agrícolas acogieron con escaso entusiasmo y a veces con abierta animadversión la nueva política que no estaba respaldada por grupos decididamente interesados en ella con excepción de algunos sectores artesanales de escasa importancia política. Pero si estas medidas no tenían un apoyo vigoroso, tampoco era muy fuerte la oposición y bajo la influencia del presidente y de los políticos adictos a él, el país adoptó esta nueva orientación, que ya no abandonaría en los años siguientes.

De mayores efectos inmediatos sobre el país fueron los problemas fiscales del Estado y las medidas que se adoptaron para resolverlos. El tesoro público, comprometido con el pago de una deuda pública bastante elevada y el sostenimiento del ejército, cuyo costo aumentó sensiblemente con la adopción de la unidad política y a causa de las guerras civiles, vivía siempre al borde de la bancarrota, y apenas podía destinar sumas muy reducidas a servicios sociales como la educación pública, la salubridad o el desarrollo de las comunicaciones. Estas dificultades fiscales llevaron a suspender el pago de la deuda pública durante una buena parte del período de la regeneración, pero también condujeron a la utilización del Banco Nacional que había abierto sus puertas en 1881 y de sus poderes de emisión como fuente de financiamiento del tesoro público.

El banco había recibido el monopolio del derecho de emisión de billetes, aunque se permitió a los bancos privados conservar tal atribución dentro de condiciones muy precisas, hasta 1887. Igualmente adquirió la exclusividad del depósito de fondos públicos. Estas medidas encontraron fuerte oposición entre los banqueros privados, que veían reducido su campo de actividad y entre los economistas ortodoxos liberales, que veían en estas medidas una peligrosa herejía. A partir de 1884 comenzó un proceso de depreciación de los billetes del banco, que se agudizó por el hecho de que desde 1885 el gobierno, acosado por el déficit fiscal y por los costos de guerra, ordenó la emisión de billetes sin respaldo para que el banco se los prestara. Como era inevitable, esto llevó a decretar el curso forzoso de los billetes de banco, que durante los años siguientes fueron emitidos de acuerdo con las necesidades fiscales del gobierno, a veces dentro de ciertas normas legales y a veces en forma clandestina. El proceso inflacionario fue acelerado: en 1885 la prima sobre las monedas extranjeras era del 38%, en 1888 llegó a 111% y en 1898 llegó al 200%. El descubrimiento, en 1894, de que el Banco Nacional había realizado varias emisiones clandestinas y de que el volumen de billetes en circulación excedía el límite fijado por la ley condujo a la suspensión de actividades del banco, pero el régimen de papel moneda continuó, y la guerra de 1899, que llevó al extremo las necesidades fiscales del Estado, provocó la impresión de billetes en tal escala que faltaba tiempo a los tipógrafos para elaborarlos. La tasa de cambio subió en ese año al 550%, a comienzos de 1901 al 5.000% y alcanzó el 18.900% en octubre de 1902, para descender y estabilizarse en seguida alrededor del 10.000%.

Se alegó en esa época que el régimen de papel moneda resultaba ventajoso para la economía nacional, e incluso que el desarrollo de la producción cafetera se debía en gran parte al estímulo ofrecido por la ampliación de la circulación monetaria. Es en efecto muy probable que mientras las emisiones se mantuvo dentro de ciertos límites, la inflación provocada haya operado como estímulo a los exportadores y, al encarecer las importaciones, como una protección adicional a la naciente industria nacional; es igualmente posible que haya beneficiado a los industriales y cafeteros, al reducir los salarios reales de sus trabajadores. Pero la forma descuidada como se manejó la emisión, los escándalos y los negocios fraudulentos que acompañaron las operaciones del banco, y el ritmo incontrolable que adquirió la inflación afectaban el clima y las condiciones adecuadas para la actividad económica y contribuían a dar prioridad a los especuladores, a quienes esperaban enriquecerse aceleradamente negociando con el gobierno y a quienes aprovechaban la ruina de muchos propietarios y empresarios para adquirir a bajo precio los bienes de aquéllos.

El acento proteccionista de la tarifa recibió nuevo énfasis durante la dictadura de Reyes, que parece haber sido favorable para el despegue de una actividad industrial importante, amparada por la paz y el orden que reinaban, apoyada en el creciente mercado creado por la producción cafetera y en grado incierto por los privilegios y subsidios oficiales. Durante las dos últimas décadas del siglo XIX el país había añadido a sus industrias tradicionales - producción de artículos de cuero, textiles de lana y algodón rudimentarios, velas y jabones- y a algunas industrias más modernas existentes desde antes -dos herrerías, fábricas de loza, licores, etc.-, un número más bien alto de pequeñas industrias modernas. En la zona antioqueña, por ejemplo, se habían establecido fábricas textiles y de chocolates, cervezas, lozas y vidrios. En Bogotá se fundó a finales de siglo la empresa que durante años sería, por sus ventas, la más grande del país, con técnicas y equipos modernos: la cervecería Bavaria, a cuyo lado se estableció luego una fábrica de envases de vidrio.

En la época de Reyes este tipo de industrias se multiplicó, y entre las principales empresas creadas entonces deben mencionarse, en Antioquia, las fábricas de tejidos de Bello, fundadas por el General Pedro Nel Ospina y otros empresarios locales, que tenía ya más de 500 obreros y empleados en 1910, y la Compañía Colombiana de Tejidos (después Coltejer), que comenzó a producir en 1908; en Bogotá quizá la empresa más importante surgida en estos años fue la fábrica de Cementos Samper, mientras que en Barranquilla la fábrica de textiles Obregón era el mayor establecimiento industrial.

Un factor que influía sobre este proceso industrial, y al mismo tiempo un índice de su desarrollo, era el incremento de la población urbana y la transformación que empezaba a operarse en las ciudades mayores. Bogotá se acercaba ya a los 120.000 habitantes en 1905, mientras que Medellín alcanzaba unos 70.000 habitantes y Cali y Barranquilla 50.000 cada una. Aunque todavía no vivía en estas ciudades sino un poco más del 60% de la población del país, y esta proporción no cambiaría mucho hasta la década del 20, cuando comienza realmente el proceso de urbanización acelerado, ya a comienzos de siglo comenzaban a instalarse servicios modernos y a aparecer algunos de los elementos característicos de las grandes ciudades. Bogotá, por ejemplo, contaba con un sistema de tranvías urbanos, con alumbrado eléctrico y acueducto, y el cemento había permitido la construcción de las primeras edificaciones de más de tres pisos; por otro lado, crecía el número de artesanos y obreros, aparecían nuevas formas de miseria y se diluían las relaciones paternalistas de las oligarquías con las clases bajas para ser reemplazadas por nuevos y más tensos vínculos de clase.

4. El desarrollo industrial y el surgimiento del sindicalismo

Los cambios políticos a partir de 1910 no afectaron en grado substancial el proteccionismo industrial. Las tarifas aduaneras en 1913, 1916 y 1920 mantuvieron las líneas anteriores, pese a ocasionales defensas del libre cambio, hechas a veces por los mismos ministros. Pero liberales y conservadores, así como los partidos socialistas que se formaron hacia 1920 acogían en general el principio de que era conveniente estimular el desarrollo industrial mediante las defensas aduaneras. Las condiciones económicas generales, por su parte, seguían estimulando el surgimiento y la expansión de nuevas industrias de consumo. El crecimiento de las exportaciones, pese a un notable estancamiento durante los años de la primera guerra mundial, continuó a un ritmo que nunca antes se había logrado ni habría de repetirse: entre 1910 y 1919 aumentaron a una tasa promedio anual superior al 11%; como se ve en el cuadro 2 pasaron de 18.5 millones de dólares en el primero de estos años a 85.1 en 1919. A pesar de que existía una fuerte tendencia a gastar estos ingresos en bienes de consumo, la demanda ejercida por los sectores exportadores, y urbanos y las dificultades de importación originadas por la guerra dieron pie para una considerable expansión de la inversión industrial, que se hacía en gran parte comprando equipos y tecnologías extranjeras.

Durante estos años se establecieron modernas industrias, de cigarrillos, dulces, gaseosas y otros productos, y se amplió la producción de cervezas, tejidos y cementos. Desde entonces comenzó a configurarse la estructura de la industria nacional, que perduraría hasta mediados de siglo: capital casi exclusivamente colombiano, organización en sociedades anónimas, generalmente alrededor de un fuerte grupo familiar que conservaba el control de la compañía, esfuerzo por establecer una posición de monopolio u oligopolio dentro del mercado nacional, que trataba de abastecerse, cuando los costos de transporte lo exigían, mediante la instalación de plantas en diversos sitios del país. Por otra parte, no se configuró el sector industrial con un grupo de empresarios orientados exclusivamente a las manufacturas: la mayoría de los inversionistas industriales se ocupaba simultáneamente del comercio, de la siembra de café o la apertura de haciendas ganaderas. Esta orientación múltiple de los sectores empresariales explica en parte por qué los partidos políticos no reflejaron directamente alternativas de política económica ni "representaron" en forma nítida clases o sectores de clase muy específicos.

El desarrollo industrial y el crecimiento paralelo de las ciudades, así como el impulso que recibieron las obras públicas, condujeron a la aparición de las primeras formas de una verdadera clase obrera, que aunque representaba todavía una muy baja proporción de la población, empezaba a desarrollar una actividad política y sindical independiente y a convertirse en fuerza política con la cual era indispensable contar. Dentro de esta clase obrera políticamente activa, sin embargo, no eran los sectores industriales los más activos ni importantes. En el sector fabril, todavía pequeño -piénsese que para 1930 escasamente podía tener más de 15.000 obreros, dos terceras partes de ellos del sexo femenino- las formas de organización sindical tuvieron carácter esporádico. El proceso de organización obrera se dio principalmente en el área del transporte -ferrocarriles, trabajadores del río Magdalena, trabajadores portuarios- y después de 1920 en enclaves extranjeros como las instalaciones petroleras y las plantaciones bananeras. A estos grupos se unían las organizaciones de artesanos, como sastres, zapateros y albañiles, entre los que se difundían vagas ideas socialistas, teñidas a veces de formas más o menos heterodoxas de religiosidad.

En todo caso, desde 1910 se presentaron ocasionalmente huelgas obreras en el país, que adquirieron un peso mayor después de 1918; en este año los trabajadores portuarios de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla se fueron al paro, y un año después una huelga de los trabajadores ferroviarios de Cundinamarca logró algunas concesiones para los obreros. En forma paralela a estas primeras acciones sindicales se constituían numerosas organizaciones obreras, algunas de las cuales proclamaron en forma inmediata una fervorosa adhesión a ideales socialistas y su separación de los partidos tradicionales. Ya en 1910 se habían realizado esfuerzos por crear un partido obrero y por formar centrales obreras que unieran los diversos sindicatos en un organismo único. En 1913 se estableció la Unión Obrera de Colombia, que vivió precariamente hasta 1916; en 1919 se reunió de nuevo un Congreso Obrero en Bogotá y durante los años siguientes se siguieron creando sindicatos en todo el país, con predominio de aquellas que agrupaban ciertos oficios artesanales, como sastres, zapateros y albañiles. El gobierno respondió a la actividad obrera con cierto paternalismo hostil; las huelgas en las que se presentaron actos de violencia fueron reprimidas brutalmente, pero se reconoció legalmente el derecho a la huelga en noviembre de 1919. Sin embargo, el decreto en que se hacía esto, prohibía toda acción distinta al simple cese del trabajo y garantizaba explícitamente el derecho de los patronos a contratar trabajadores para reemplazar a los huelguistas. Un año después se prohibió la huelga en las actividades del transporte y en algunos servicios públicos y se prohibió a los obreros declarar huelgas antes de someterse a un período de conciliación. En estos años se expidieron algunos esbozos de legislación laboral, en los que estableció el seguro de vida obligatorio en algunos casos, el derecho al descanso dominical (pero no remunerado) y algunas normas de salubridad e higiene en las fábricas, pero en conjunto la República Conservadora no estuvo inclinada a hacer a los obreros concesiones que pudieran limitar aún levemente los beneficios de los empresarios, agrícolas o industriales.

Al lado de las acciones sindicales, los trabajadores, acompañados por amplios grupos de intelectuales, organizaron un partido socialista que publicó su plataforma en 1919, en la que se hacían tímidas reivindicaciones y se confiaba el triunfo del partido a los éxitos electorales. Los obreros acogieron la plataforma con entusiasmo y en las elecciones para Cámara de 1921 obtuvieron los socialistas elevadas votaciones en las ciudades donde existían grupos de asalariados más o menos numerosos; en Medellín por ejemplo, superaron a los liberales y obtuvieron el 23% de los votos. Esto no podía sino preocupar a los liberales, que habían ido perdiendo terreno electoral en las zonas rurales; aunque muchos grandes propietarios y buen número de los cultivadores cafeteros eran liberales, los propietarios conservadores, con el apoyo de las autoridades locales se habían convertido en dueños del voto de aparceros, peones rurales y pequeños campesinos, entre quienes, por otro lado, tenían gran influencia las prohibiciones de los párrocos de dar el voto por el partido liberal. Por lo tanto la única esperanza sería del liberalismo residía en captar el creciente voto urbano; si obreros y artesanos acogían las banderas socialistas, el liberalismo perdería definitivamente toda posibilidad de triunfo. El liberalismo respondió con rapidez al desafío, invitando por la prensa a los artesanos a apoyar a los liberales contra el conservatismo, al que señalaba como obstáculo real de toda reforma favorable a los obreros y adoptando en el programa del partido algunas reivindicaciones reformistas de los socialistas: asistencia pública, campañas sanitarias, reglamentaciones sobre jornales mínimos y trabajo de niños; por otra parte el programa pedía que se estableciera el arbitraje obligatorio para la solución de las huelgas. Estos cambios del programa liberal, además de las razones electorales que los impulsaban, reflejaban también la influencia ideológica del socialismo en muchos jóvenes liberales y estaban dentro de cierta línea de modernización de los programas del partido a la que había contribuido 10 años antes el general Uribe Uribe. Así, en forma algo imprevista el liberalismo pasó a asumir el papel de partido urbano en el que se expresaban -orientados y dirigidos por sectores particularmente flexibles de la burguesía- en alguna medida reivindicaciones de sectores obreros, mientras se abandonaban los principios ultraliberales e individualistas que habían definido durante las décadas anteriores la visión liberal de los problemas sociales.

Los socialistas trataron de responder a la incorporación de sus ideas en el programa liberal radicalizando sus exigencias: si el programa socialista de 1920 había sido superado por la Convención liberal de Ibagué de 1922, apenas dos terceras partes de la plataforma elaborada por el Tercer Congreso Socialista de 1922 fue aceptable para los liberales, según la apreciación del secretario de la Junta Nacional Socialista Francisco de Heredia. Este programa, que puede servir de ejemplo de las ideas entonces agitadas, afirmaba que el PS pretendía luchar por la "abolición, de la explotación del hombre por el hombre", pero manifestaba la confianza en la fuerza de las ideas socialistas y en la posibilidad de que se impusieran pacíficamente dentro de un sistema democrático electoral "la legalidad democrática no tiene por qué asustar al proletariado, que es la, mayoría", afirmaba la plataforma. No obstante, advertía que si las camarillas políticas hacían uso de la violencia contra el pueblo, organizarían "el ajusticiamiento de los responsables". Igualmente manifestaba el partido su plena adhesión a la democracia, con "libertad irrestricta del pensamiento, de la palabra y de la prensa", mientras promovía, como parte del programa, las reformas que mejorarán "las condiciones de vida del común de las gentes" y "el desarrollo de las riquezas naturales del país". Entre las propuestas de reforma plantadas se destacan la nacionalización de la tierra, del petróleo, del carbón y el platino, igualdad total de hombres y mujeres, divorcio absoluto, establecimiento de jornada máxima de ocho horas y ampliación del derecho de huelga, controles de precios a los arrendamientos, así como la eliminación del ejército y su incorporación dentro de "una gendarmería o guardia civil", etc.2.

Las dificultades de operar independientemente del liberalismo se manifestaron inmediatamente. Para las elecciones de 1922, el liberalismo decidió lanzar la candidatura presidencial de su jefe Benjamín Herrera, a quien se enfrentó el conservador Pedro Nel Ospina. Los socialistas, invitados por Herrera, lo apoyaron y contribuyeron a que obtuviera el triunfo en las zonas urbanas del país: Herrera ganó en todas las capitales de departamento, menos tres, y en general obtuvo mayoría en las regiones donde había una población obrera y artesana numerosa. A partir de este momento el liberalismo acentuó su línea de apoyo a ciertas reivindicaciones proletarias y fue adquiriendo una base obrera de magnitud cada vez mayor, que influyó decisivamente en el carácter del partido y lo sometió a repetidas tentaciones populistas, pero nunca puso en peligro el control ejercido por la burguesía liberal sobre su orientación básica.

IV. La danza de los millones y el fin del régimen conservador

Pese a los éxitos que logró Herrera en las grandes ciudades, el candidato conservador, con una elevada votación rural, obtuvo el triunfo: Ospina logro 414.000 votos contra 256.000 de su oponente. La demostración del renacimiento liberal era clara, y habría sido mayor sin el fraude general que se hizo en las elecciones, marcadas además por frecuentes estallidos de violencia.

El presidente electo, hijo del mandatario vencido por los liberales en 1861, era un exitoso empresario antioqueño, fundador de industrias y dueño de algunas de las mayores y más modernas haciendas cafeteras y ganaderas del país. Con su elección, la nueva burguesía -nueva por sus actitudes y actividades, aunque compuesta en gran parte por miembros de los grupos dominantes tradicionales- tenía a uno de sus más ilustres representantes al frente del estado: la actuación de Ospina estuvo caracterizada por la audacia, el pragmatismo, el afán de progresos y el deseo de modernización que compartía esa burguesía, cuyos miembros más inteligentes querían validar su derecho tradicional a conducir el país mediante administraciones más eficaces y progresistas, con una adecuada mezcla de paternalismo y represión en el tratamiento de las clases bajas.

Uno de los centros de atención de la actividad presidencial fue el avance de las vías de comunicaciones, para lo cual el país pudo contar con las sumas provenientes de la indemnización de Panamá, así como con créditos e inversión extranjeras. Todavía el núcleo del programa era la ampliación de la red ferroviaria, que había venido avanzando con lentitud entre una maraña de intrigas, indemnizaciones, estafas y dificultades administrativas. Para 1910 Bogotá había sido unida por dos vías al Magdalena, y el ferrocarril de Antioquia completó 102 kilómetros que recibían ya amplio uso. El total de las líneas existentes, que era entonces de unos 900 Km, pasó en 1922 a casi 1.500. En los cuatro años de la administración Ospina se añadieron 800 kilómetros a la red férrea, que ya para entonces había adquirido la fisonomía que mantendría en adelante. La baja en los costos de transportes que la conclusión de los ferrocarriles permitió obtener, constituyó uno de los factores básicos en la exportación cafetera y hacia 1930, con una red total de unos 2.700 kilómetros, todas las zonas cafeteras importantes del país contaban con una ruta férrea adecuada para encontrar la salida al mar.

El sistema de transportes colombianos se amplió en otras áreas con bastante rapidez. Desde 1905 los automotores comenzaron a utilizarse en el país, lo que obligó al gobierno a atender a la construcción y conservación de carreteras. Pero todavía en 1930, cuando las estadísticas oficiales declaran la existencia de unos 5.700 kilómetros de vías para automotores, la importancia económica de éstos era leve en comparación con el ferrocarril. La desarticulación del sistema de comunicaciones terrestres, que dependía del lento transporte fluvial por el Magdalena para empatar diversos tramos de ferrocarril o para completar la ruta al mar, favoreció la utilización temprana de la aviación comercial: desde 1919 comenzaron a efectuarse vuelos regulares en hidroaviones entre la costa Atlántica y Girardot, convirtiendo la usual expedición de dos semanas en un viaje de pocas horas. Lo que esto representó, junto con el uso del correo aéreo, para impulsar una integración mayor del país es imposible calcular; en el mundo político el avión permitiría el contacto directo aunque fugaz, de los jefes y sus seguidores: las "giras" políticas se convertirían pronto en un hábito. Finalmente, durante la década del veinte el sistema de telégrafos, ya bastante avanzado desde finales de siglo, fue complementado por la instalación de las comunicaciones inalámbricas; la radiodifusión comercial, con su profunda influencia sobre las costumbres sociales y políticas, sólo iría a aparecer en la década siguiente. La prensa había tenido también un vigoroso desarrollo, y entre los 30 o más diarios que circulaban en las principales ciudades del país, algunos como El Tiempo, El Espectador y el Diario Nacional de Bogotá, Relator y Diario del Pacífico en Cali, El Colombiano y La Defensa en Medellín, ejercían un poder político incommensurable con su circulación, pero explicable por la composición aún muy elitista de su público, que incluía esencialmente a los miembros de las clases dirigentes, a los reducidos grupos profesionales y a los artesanos y obreros más atraídos por la política.

El arreglo de la cuestión de Panamá, mencionado ya, no sólo permitió que el gobierno contara con 25 millones de dólares para sus gastos en obras públicas, sino que abrió el país a un influjo acelerado de inversión extranjera y permitió a las autoridades colombianas y a los bancos lanzarse sobre el mercado de capitales de los Estados Unidos para tratar de obtener créditos con diversos destinos. Los préstamos se hicieron más frecuentes desde cuando el presidente Ospina logró la reorganización del sistema bancario y fiscal del país, con base en las recomendaciones de la misión norteamericana dirigida por E. Kemmerer. Esta reorganización, que incluyó la creación del Banco de la República, la reforma del sistema fiscal y contable del estado y otros aspectos, y tuvo visibles efectos sobre el mercado de capitales y el sector financiero, dio confianza a los inversionistas norteamericanos que en el solo año de 1926 prestaron más de 30 millones de dólares y continuaron prestando, hasta que a fines de 1928, se habían recibido más de 200.000.000 de dólares en créditos. Fuera de esto entraron al país unos 50.000.000 por inversión directa, sobre todo en el área de los petróleos. Este influjo de divisas, reforzado por el crecimiento de las exportaciones, dio al país una capacidad de compra en el exterior con la que pocos años antes habría soñado (cuadro número dos). La industria aprovechó por su parte la disponibilidad de moneda extranjera para ampliar su capacidad y adquirir bienes de producción.

Por otra parte, los ingresos del gobierno central aumentaron rápidamente, no sólo por el aporte directo de recursos de créditos -que fueron obtenidos con mayor desenvoltura por municipios y departamentos- sino por el efecto sobre los ingresos de aduana de los aumentos en las importaciones y en general por el efecto en los recaudos fiscales de la mayor actividad económica. El cuadro 3 da una idea de cómo tuvo lugar este crecimiento, que sólo vino a detenerse temporalmente con la crisis de 1929.

Los ingresos de municipios y departamentos tuvieron un auge paralelo, que permitió a muchos de ellos emprender la construcción de acueductos, centrales eléctricas, vías de comunicación, etc. El gobierno central, por su parte, orientó sus gastos, cómo se ve claramente en el cuadro anterior, especialmente a las obras públicas, entre las cuales la más favorecida fue la construcción de ferrocarriles.

En esta situación, el crecimiento de la demanda interna de artículos de consumo, explicable por el aumento en el valor de las exportaciones y de los gastos estatales, conjugado con una respuesta muy poco dinámica de la producción agrícola, provocó durante la década del 20 fuertes tendencias inflacionarias, que alcanzaron su punto más alto hacia 1926. Los observadores de la época atribuyeron gran parte de las dificultades de la producción agrícola a los efectos de las inversiones en obras públicas, que habrían desplazado más de 300.000 trabajadores del campo y habrían provocado una rápida elevación de los salarios reales, rurales y urbanos. Aunque el argumento era sin duda interesado y estaba originado en los sectores de propietarios rurales, tiene el interés de llamar la atención hacia la configuración que cada día se hacía más clara de un evidente problema agrario, que se manifestaba simultáneamente en las dificultades que encontraban los productores rurales para abastecer una demanda urbana creciente y en la agudización de los conflictos entre propietarios, aparceros y colonos.

En todo caso, ante el hecho evidente del alza de los precios agrícolas, el congreso aprobó una ley que dio lugar a un amplio debate sobre la situación agraria, la llamada "Ley de Emergencia" (agosto de 1926), que autorizaba al Presidente de la República para suprimir o reducir los derechos de aduana a los artículos alimenticios. El presidente Miguel Abadía, ante la persistencia de la inflación, expidió en junio de 1927 el Decreto 592 que rebajaba bruscamente los impuestos de aduana sobre productos alimenticios. Aunque se ha visto en esta ley una prueba firme de un triunfo de los sectores industriales y cafeteros sobre los propietarios rurales tradicionales, es dudoso que los primeros tuvieran entonces mucho peso político y resulta difícil explicar la aprobación de la ley por parte, de muchos representantes ligados a los propietarios rurales sin tener en cuenta factores de orden público como el descontento urbano y la agitación sindical y socialista que habían sacudido durante estos años las ciudades más importantes del país.

**CUADRO 3
INGRESOS Y GASTOS EFECTIVOS
DEL GOBIERNO NACIONAL**

Años	Ingreso total Millones de pesos	Impuesto aduana	Impuesto renta	Ingreso extraord.	Gastos OO.PP	Gastos totales
1923	43.5	20.5	0.7	10.2	38.9	6.3
1924	39.9	19.9	0.5	6.4	40	12.1
1925	51.5	29.7	0.7	5.3	49.5	17.8
1926	60.6	34.8	1.1	5	67.4	33.5
1927	86.2	38.5	1.3	22.9	84.1	40.1
1928	107.5	41.1	3.2	32.4	116.2	63.1
1929	75.2	40.7	2.7		84	29.8
1930	54.3	21.2	3.3	4.5	62	14.2

Fuente: Dane.

En 1926 el Presidente Ospina había sido sucedido por Miguel Abadía Méndez, un hombre que había llegado a la presidencia después de una larga carrera en la administración pública que no había tenido demasiado brillo ni rasgos de incapacidad excesiva. Pero la indecisión del mandatario, su apego a maniobras políticas irrelevantes, no haría sino subrayar una repentina incongruencia entre el régimen conservador y la situación del país. Mientras éste se había transformado a grandes saltos, se agudizaban los conflictos sociales y la prosperidad, sostenida por la inyección continua de nuevos créditos extranjeros y el mantenimiento de un alto nivel de exportador, pronto se vendría al suelo, el conservatismo se entregó de cuerpo y alma a preparar las elecciones, a garantizar su permanencia en el poder y a debatir los posibles candidatos que lo representarían en las elecciones de 1930.

La agitación socialista no había desaparecido. Intelectuales y periodistas comenzaba tímidamente a leer a Marx y a Lenin. El movimiento socialista, bajo la influencia de la revolución Rusa, se fue haciendo más radical y surgieron divergencias de línea entre sus diversos exponentes. Líderes socialistas como Raúl Mahecha y Angel María Cano ayudaron a los obreros a organizar huelgas cada vez más decididas; otros, como Eutiquio Timoté, orientaron las luchas de los indígenas del Tolima por la preservación o la restitución de sus tierras, arrebatadas por nuevos empresarios o viejos terratenientes al amparo de leyes que, como la 104 de 1919, habían dado nueva fuerza legal a la destrucción de los resguardos. Los conflictos entre obreros y patronos adquirían con frecuencia caracteres muy agudos, pues la falta de protección legal a la huelga obligaba a los trabajadores a adoptar tácticas violentas para tratar de lograr las más pequeñas reivindicaciones. Un buen ejemplo de esto fueron las huelgas de la Tropical Oil Co., orientadas por Mahecha: en 1924 los obreros comenzaron una huelga en la que pedían alzas en los salarios, que no habían subido en dos años, y mejores condiciones sanitarias. El gobierno se puso de parte de la compañía, consideró inconveniente toda alza de salarios y autorizó a aquella para despedir a los huelguistas: 1.200 de estos perdieron sus puestos. Mahecha pasó dos años en la cárcel y en 1927 estuvo otra vez entre los organizadores de una segunda confrontación: 5.000 obreros se mantuvieron parados durante 3 semanas, pero el gobierno siguió de parte de la compañía. Una noche la policía disparó sobre los trabajadores, dos de los cuales murieron. El gobierno declaró el estado de sitio y encarceló y deportó dirigentes y obreros. La huelga terminó, pero a costa del prestigio del gobierno, que no hacía sino disminuir.

Por su lado los dirigentes socialistas más notables habían fundado en 1926, el tercer congreso de la Confederación Obrera Nacional, el partido socialista revolucionario, que reunía a miembros del partido socialista anterior, ya desaparecido, con nuevos militantes. Los más notables organizadores fueron Ignacio Torres Giraldo, Francisco de Heredia, Tomás Uribe Vargas, Guillermo Hernández Rodríguez y María Cano, quienes tuvieron que enfrentar la oposición de sectores más radicales que defendían la formación de un partido comunista. El PSR se vio siempre amenazado por la tentación de muchos de sus miembros de unirse a grupos liberales que creían que el desprestigio del gobierno creaba las condiciones para una revuelta armada, y por quienes querían utilizarlo sólo como medio para adquirir notoriedad mientras se obtenía una curul liberal. Mientras la agitación y los conflictos obreros parecían estar en ascenso los sectores más obreristas mantuvieron el control del partido; tan pronto, comenzó a disminuir, a mediados de 1928, la actividad obrera -quizás a causa del aumento del desempleo, la estabilización de los precios y un alza en los salarios reales- los grupos más impacientes, vinculados a antiguos guerrilleros liberales, tomaron el control y formaron el Comité Conspirativo Central, para preparar una revuelta armada que derribara al gobierno conservador.

Este, por su parte se defendía de la agitación con medidas de orden público: los congresistas conservadores preocupados por la creciente ola del socialismo revolucionario propusieron una ley sobre el "orden social" que ordenaba el castigo de todos los que atacaran la familia, "la idea de patria" o el sagrado derecho de propiedad. En la discusión que se desarrolló acerca de la propuesta los congresistas liberales se opusieron, algunos (y en esto fueron acompañados por algunos conservadores) porque violaba las garantías y derechos individuales fijados en la Constitución y otros porque veían con simpatía u oportunismo la oleada de agitación contra el gobierno o incluso los mismos movimientos obreros. Aprobada la ley -algo suavizada- se procedió a apresar en octubre de 1928; a la mayoría de los liberales del PSR, pero ninguna de estas medidas impidió la más violenta de las huelgas de la época: la que se hizo contra la United Fruit Co., en la región bananera de Santa Marta y que se convirtió, después de una increíble serie de demostraciones de parcialidad del gobierno, en otra de las razones del creciente desprestigio del gobierno. El ejército apresó a más de 400 obreros, para tratar de forzar a un arreglo de cambio de libertad, dio protección a los esquiroleros e incluso puso a los soldados a trabajar para la United Fruit. Esta compañía se opuso a todo acuerdo, en gran parte porque se negaba a reconocer que los huelguistas eran sus obreros, para evadir responsabilidades laborales. La situación se fue agudizando y los trabajadores, después de 5 semanas de paro, trataron de impedir el trabajo sentándose, con mujeres y niños, sobre los rieles de los trenes bananeros. El jefe militar de la zona general Carlos Cortés Vargas, después de haberse declarado en estado de sitio, ordenó a las tropas disparar contra la multitud de huelguistas y simpatizantes reunida en la plaza de Ciénaga, el 5 de diciembre de 1928. Los huelguistas, en desbandada, quemaron los edificios de la compañía e intentaron capturar a los empleados de esta; el ejército dio muerte a 29 obreros más, que se sumaron a las víctimas de la primera descarga; habían muerto al menos 100 personas, y algunos cálculos elevan la cifra hasta 1.400. Los dirigentes liberales, especialmente el joven representante Jorge Eliécer Gaitán, se apoyaron en el incidente para acabar de desacreditar al gobierno conservador y provocaron un debate en el congreso que resultó espectacular. Otros problemas se le presentaron al gobierno. Unas acusaciones sobre parcialidad política y fraudes de la administración municipal de Bogotá condujeron, en junio de 1926, a la renuncia de dos ministros y el alcalde; uno de los ministros caídos era el de guerra, responsable inmediato de la masacre de las bananeras.

Por último, la "prosperidad a debe", como fue llamada tanto por su dependencia en el crédito externo como por la aparición de un fuerte déficit fiscal a partir de 1928, vino a ser interrumpida primero por la suspensión de nuevos créditos al país a comienzos de 1929 y luego por la crisis de la Bolsa de Nueva York en octubre del mismo año, que repercutió al poco tiempo en la economía nacional y en la capacidad fiscal del estado. El aumento del desempleo, las dificultades económicas, la escasez de alimentos acabaron con el poco prestigio que todavía pudiera quedarle al régimen.

Pero éste todavía podía ganar las elecciones, aunque fuera quizás inevitable que el liberalismo ganara entre los sectores obreros; lo que vino a hacer posible la victoria liberal para las próximas elecciones presidenciales fue la profunda división entre los candidatos conservadores, Guillermo Valencia y Alfredo Vásquez Cobo. La división se agudizó y complicó, en medio del regocijo liberal, por el hecho de que el clero, que había acompañado siempre en forma casi unánime al candidato conservador, se dividió entre los dos y el arzobispo de Bogotá, Mons. Ignacio Perdomo no logró imponer su opinión ni siquiera sobre los párrocos, confusos con sus vacilaciones; a mediados de 1929 apoyó la candidatura de Vásquez Cobo; en enero de 1930 y después de que los liberales decidieron irse a las elecciones con candidato propio, "en vista del peligro que amenaza las instituciones cristianas que nos rigen", ordenó a los católicos, en forma obligatoria, votar por Valencia para "oponerse al triunfo del liberalismo" el 1º de febrero recomendó la candidatura de Vásquez Cobo.

El liberalismo, que finalmente veía, con la división del adversario, alguna posibilidad de triunfo, seleccionó como su candidato a Enrique Olaya Herrera, quien llevaba 8 años como Delegado colombiano en Washington. En febrero de 1930 se hicieron las elecciones y Olaya Herrera, aunque no obtuvo la mayoría absoluta, llegó al poder por obra de la división del partido de gobierno. Nadie mejor que Olaya, funcionario permanente de los gobiernos conservadores, para ejercer un gobierno de transición, que no provocara demasiado recelo entre estos; nadie mejor que él, siempre obsecuente con los Estados Unidos, para contar con el apoyo de aquella nación en un momento en el que la crisis económica podía llevar al país a muy difíciles situaciones.

En los 50 años de 1880 a 1930 Colombia había duplicado su población y experimentado una profunda transformación económica y social. Un nuevo producto de exportación, el café, se había convertido en el principal impulsador del desarrollo; los cafeteros se transformaron en forma paralela en el grupo con mayor peso dentro del conjunto de propietarios rurales del país. El auge de la economía cafetera había contribuido a que se acumularan, en manadas de comerciantes, financistas o cultivadores, importantes volúmenes de capital; por otro lado había elevado el ingreso rural de ciertas zonas del país, e impulsado la especialización económica regional. En esta medida, y en cuanto ayudó a aumentar la población asalariada urbana y rural, fue causa principal de la conformación de un mercado interno amplio. Durante la década del 20 el auge exportador y el ingreso del país de cuantiosos capitales extranjeros incrementaron de manera drástica la capacidad de gasto del estado, que impulsó la creación de una red nacional de transporte más eficaz y mejor integrada que antes. Estos procesos, que algunos investigadores han cobijado bajo la denominación de "acumulación originaria del capital" creaban las condiciones para un crecimiento más acelerado del embrionario sector industrial, que se había beneficiado antes con las políticas proteccionistas elaboradas por Núñez y Reyes. Los grupos industriales junto con cafeteros y comerciantes, de los que muchas veces eran indistinguibles, conformaron una alianza que, representada políticamente dentro de ambos partidos, iba desplazando lentamente, y sin una ruptura tajante, al grupo de terratenientes tradicionales y de comerciantes que antes había dominado al país.

La república conservadora, apoyada en la coacción electoral (como lo había sido el período radical anterior, no hay que olvidarlo), había podido negarse a un acuerdo institucional con los liberales, que estableciera cierto consenso dentro de la clase dirigente; con esto dejaba en herencia un agudo problema electoral y una tradición de gobierno de partido que desembocaba en la violencia. Y también había podido cerrar los ojos al sentido de las transformaciones sociales recientes que pretendía enfrentar, como los empresarios menos lúcidos, como los caciques rurales que tanto peso tenían en el partido conservador, con la acción simple de inspectores de policía; con ello daba al liberalismo la opción de integrar en sus filas a las masas urbanas mientras que la incorporación de los campesinos en el campo conservador dependía del mantenimiento de una estructura rural arcaica, llena de rasgos precapitalistas y señoriales, y que era preciso defender a toda costa. La conservación de un mínimo de paz entre los dos partidos quedaba condicionada a dejar intacta la situación rural. De este modo la burguesía colombiana, que habría podido juzgar conveniente la modernización del régimen rural, quedaba en los hechos comprometida con la conservación por mucho tiempo de uno de los elementos claves de atraso del país, para evitar una ruptura entre los sectores más avanzados de ellas, tentados a apoyarse en la clase obrera, y los más conservadores, atados a los caciques rurales. El acuerdo implícito que había logrado, y que a veces se intentó tímidamente romper, le permitiría a la burguesía del país gobernar sin la competencia de nuevos grupos sociales. Pero la tensión generada por el insoluble problema electoral y por el congelamiento del régimen social rural, apoyado en la ignorancia, el analfabetismo y la miseria de masas campesinas, a las que la clase dirigente no ofrecía nada y a los que el Estado ignoraba excepto en lo que tuviera que ver, con la cuestión electoral, esa tensión volvería, 20 años después de la caída del régimen conservador, a llevar a la más profunda crisis las instituciones de la república.